

## Los Presupuestos Generales del Estado 2013

# Reforzar a los rentistas, debilitar a los trabajadores

**Joaquín Arriola**

Los Presupuestos Generales del Estado consolidados (PGE) incluyen lo que ingresa y gasta la administración central del Estado, la seguridad social y los organismos autónomos dependientes del estado, como la Biblioteca Nacional, el Consejo Superior de Deportes, los Parques Nacionales o las Confederaciones Hidrográficas, hasta un total de 64 organismos.

Los PGE determinan por tanto las orientaciones de política económica del Estado, y como una parte importante de los ingresos de las instituciones regionales y locales dependen de las transferencias del Estado, también condicionan las políticas que pudieran aplicar los gobiernos autonómicos.

En situaciones normales, los PGE intentan, junto con el mantenimiento del orden público (justicia, defensa, policía y relaciones exteriores), dinamizar la actividad económica y social y mejorar las condiciones de protección social. Estas son las tres principales actividades, se espera, lleve a cabo el Estado con el dinero que gestiona. Ese dinero lo recauda el Estado del conjunto de la nación y representa una parte del valor que produce el trabajo social nacional—incluido el trabajo de los funcionarios y trabajadores del Estado, que también pagan impuestos y cotizaciones sociales—.

Cuando la contribución de los trabajadores y rentistas españoles no es suficiente para cubrir los gastos, el Estado se endeuda, es decir, ofrece



una rentabilidad a esos mismos ciudadanos —o a los del extranjero— para financiar sus actividades. El balance fiscal (déficit o superávit) es la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta, y se mide de dos formas: lo que se ingresa y se gasta normalmente en las actividades propias, no financieras (es lo que se conoce como «procedimiento de déficit excesivo») o el balance total, incluyendo lo que ingresa por emisiones de deuda y lo que gasta en pagar los intereses y amortizar la deuda de años anteriores.

Pues bien, es ya una tradición española que la recaudación normal del Estado sea muy inferior al gasto realizado, con lo cual siempre ha tenido que recurrir a endeudarse en mayor o menor medida. Pero la crisis actual es de tal dimensión, que en los años 2009 y 2010 el gobierno no previó ingresos corrientes (es decir recaudando impuestos, tasas, transferencias recibidas e ingreso del patrimonio) ni siquiera para hacer frente a los gastos «normales», no financieros. Y el problema se agravó porque ni siquiera esas previsiones de ingresos se cumplieron.

En esas circunstancias, el ajuste del presupuesto es una necesidad ineludible, so pena de llevar al Estado a una situación insostenible. Ahora bien: el ajuste se puede llevar a cabo aumentando los ingresos corrientes, o reduciendo el gasto corriente. Y desde 2010 tanto el gobierno socialista como el gobierno popular han optado por centrar el ajuste en la reducción del gasto. El gasto social, el económico y las transferencias alcanzaban en 2009 unos 7.120 euros por cada habitante, y las previsiones indican que el año próximo se habrán reducido hasta los 5.928 euros por cabeza.

Contra lo que pudiera parecer, esta reducción no se ha centrado directamente en el llamado «gasto social», sino en las actividades económicas (agricultura, industria y energía, comercio, turismo y PYME, subvenciones al transporte, infraestructuras, I+D...), en la cooperación al desarrollo, defensa, y en las transferencias a las comunidades autónomas y entidades locales, que en 2010 llegaron a superar los 71 mil millones de euros, para reducirse a 40 mil millones en 2011, 43 mil millones en 2012 y una cifra similar en 2013.

## La evolución del PGE está generando un impacto económico muy negativo, deprimiendo la actividad privada y una tensión creciente en la provisión de servicios sociales básicos

El gasto social tiene dos componentes básicos: las transferencias (pensiones, desempleo) que gestiona sobre todo la administración central y los servicios sociales (educación, salud, dependencia), que gestionan las administraciones regionales y locales. Por tanto, la evolución del PGE lo que está generando es un impacto económico muy negativo a nivel central, deprimiendo la actividad privada, y una tensión creciente en la provisión de servicios sociales básicos a nivel regional.

Y todo esto, en un contexto en que la deuda financiera que tenemos cada uno a través del presupuesto común no deja de crecer. Así en 2009, cuando

los PGE gastaban 7.120 euros por habitante en las «cosas de comer», cada ciudadano tenía que hacer frente a 1.106 euros de gastos financieros. Y el año próximo, el gasto operativo se reducirá a 5.972 euros, y el gasto financiero aumentará a 2.136.

En puridad, las previsiones del presupuesto general del estado para 2013 no son mucho más restrictivas que las de 2012, por cuanto el gasto total aumenta un 5,5%, pasando de 362 mil millones de euros en 2012 a 382 mil millones de euros. Ahora bien, ese aumento en 20 mil millones de gasto se distribuye en una reducción de 2.060 millones de euros en los gastos operativos, y un aumento

### Gasto por habitante de los PGE consolidados

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2009	2013/ 2012
Servicios públicos básicos (ley y orden)	384	433	469	467	459	418	379	353	-23,1%	-6,9%
Gasto social	3.033	3.260	3.446	3.727	3.848	3.884	3.710	3.773	-1,9%	1,7%
Actuaciones económicas	756	808	857	834	845	693	573	510	-39,6%	-10,9%
Actuaciones generales	1.473	1.589	1.683	2.092	1.813	1.121	1.323	1.292	-28,7%	-2,4%
Total	5.646	6.090	6.454	7.120	6.965	6.115	5.985	5.928	-14,9%	-0,9%
Compra de Deuda Pública	390	352	360	372	493	581	610	815	65,1%	33,5%
Pasivos financieros	708	747	756	734	759	992	1.064	1.321	74,0%	24,2%
Total operaciones de financiación	1.098	1.099	1.116	1.106	1.253	1.572	1.674	2.136	70,5%	27,6%
<b>TOTAL</b>	<b>6.743</b>	<b>7.189</b>	<b>7.570</b>	<b>8.226</b>	<b>8.218</b>	<b>7.688</b>	<b>7.659</b>	<b>8.064</b>	<b>-1,9%</b>	<b>5,3%</b>

de 22.043 millones en los gastos asociados a la compra de deuda pública –sobre todo por la Seguridad Social– y al pago de intereses. O dicho de otra forma, los PGE de 2013 contribuyen a transferir más riqueza hacia las clases rentistas, propietarias de títulos de deuda pública, en contra del resto de los ciudadanos y la actividad económica en general.

La mayor carga de la deuda no obedece a que el Estado vaya a gastar más, pues el gasto se ha congelado,

incluso disminuye un poco, unos 43 euros por persona. El problema gordo del presupuesto está en los ingresos. El gobierno prevé recaudar 28.334 millones de euros más en impuestos de lo que preveía recaudar en 2012, pero las transferencias que se recibían de la UE se reducen en 22.962 millones de euros. Como la recaudación prevista por cotizaciones a la seguridad social, tasas y ventas de patrimonio se prevén menores que en 2012, el resultado es que la brecha fiscal se amplía: la brecha total prevista pasa

de 85.675 millones de euros de déficit previsto para 2012 a 110.582 millones en 2013, algo así como el 10,3% del PIB.

¿Cómo resuelve el gobierno este problema, ya que de lo que se trata es de que se reduzca el déficit excesivo público por debajo del 4,5% del PIB, esto es, inferior a unos 40.000 millones de euros en el caso del Estado y de 7.500 millones de euros en el caso de las Comunidades Autónomas? El truco consiste en que en el cálculo del déficit excesivo solo se computa el endeudamiento neto, esto es, la necesidad de financiación excluidos los ingresos y gastos financieros. Y además no se toma en cuenta la Seguridad Social, ni las empresas públicas, de modo que en el caso del Estado central, los gastos no financieros que se computan son 162.106 millones de euros, y los ingresos 124.044 millones, de donde resulta un déficit presupuestario de 38.063 millones que, con otros pequeños ingresos y gastos se eleva a 40.390 millones de euros, el 3,8% del PIB al que se ha comprometido el gobierno.

Estas técnicas contables contribuyen a aumentar las suspicacias de los acreedores actuales y futuros, y explican también el malestar reinante entre los gobiernos autonómicos, que tendrán que «dar la cara» por los recortes en gasto social que se verán obligados a acometer.

Y así, con procedimientos de ingeniería financiera por medio, el presupuesto público va perdiendo cada vez más su carácter de instrumento central de fomento del bienestar y garantía de provisión de servicios públicos para el bienestar del conjunto de la población, para ser un instrumento al servicio de las clases rentistas, prestamistas del Estado y de los grandes empresarios que ven en el deterioro de las infraestructuras y los servicios públicos una excelente oportunidad de negocio mercantil. ■

## PGE consolidados. Millones de euros

	2011	2012	2013
Servicios públicos básicos	19.731	17.918	16.725
Gasto social	183.290	175.387	178.771
Actuaciones económicas	32.680	27.077	24.177
Actuaciones generales	52.888	62.549	61.198
Total gasto operativo	288.589	282.931	280.871
Compra de Deuda Pública	27.400	28.848	38.590
Pasivos financieros	46.797	50.289	62.588
Total gasto de financiación	74.197	79.137	101.178
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>362.786</b>	<b>362.068</b>	<b>382.049</b>
Impuestos directos y cotizaciones sociales	189.727	184.268	192.500
Impuestos indirectos	36.142	21.095	39.594
Transferencias recibidas	11.196	38.522	15.560
Otros ingresos corrientes	16.373	47.992	13.777
Total ingresos corrientes	253.438	261.432	264.043
Ingresos de capital	2.471	2.384	2.072
Ingresos financieros	16.453	12.574	5.352
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>272.363</b>	<b>276.390</b>	<b>271.466</b>
Balance déficit (-) superávit (+)	-90.423	-85.678	-110.582